LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LA IGLESIA

Miguel Angel Hernández Romo

"Entre los numerosos esquemas contruidos por la ciencia jurídica, el de persona ocupa un lugar destacado; más aún, el lugar más importante: Es natural: en torno de la persona y de la conducta humana gira todo el derecho".

De ahí el gran interés que suscita el tema de la iglesia como persona, para el jurista formado en la civilización occidental, construida sobre los pilares de la religión judeo-cristiana, de la filosofía helénica y de los principios del derecho romano.

Y es que, hasta hace algunos meses, el constituyente mexicano disponía:

"La Iglesia carece de personalidad jurídica".

En cambio, desde hace algunos meses, el constituyente permanente expresa:

"La Iglesia tendrá personalidad jurídica..... una vez que obtenga el correspondiente registro..... Constitutivo".

El contraste del texto constitucional: Ayer: "La Iglesia no tiene personalidad jurídica"; Hoy: La Iglesia sí tiene personalidad jurídica, lleva al jurista a preguntarse si el legislador tiene facultad omnimoda, absoluta, para dar o quitar la personalidad jurídica, a un ente cuya realidad es indiscutible. Y este tema nos conduce al planteamiento de la validez del voluntarismo jurídico, como único elemento constitutivo del derecho: ¿Es derecho lo que quiere el legislador? ¿El orden jurídico depende exclusivamente de lo que el legislador quiere que sea derecho?.

¿Podemos tomar en serio, la designación que el emperador Calígula hizo, de nombrar Cónsul a su caballo?.

El legislador no nos otorga graciosamente la libertad de pensar, de opinar, de transitar, ínsita en la naturaleza humana. En todo caso, nos la reconoce y regula para el bien común. Porque las realidades -los datos, diría Geny- se imponen a la

voluntad del legislador.

El ser humano -Ángel y Bestia- cuerpo y espíritu, tiene múltiples fines que alcanzar, para su desarrollo y perfeccionamiento, y por ello debe existir una coordinación, una colaboración sin lucha ni distensión, entre las instituciones que tienen el deber de fomentar y alcanzar el bien común del ser humano, tanto en sus valores espirituales, trascendentales, como en sus valores temporales, materiales.

"La persona moral o jurídica es un sujeto de derechos y obligaciones y la personalidad jurídica es la capacidad de (tener) derechos y obligaciones".

"La iglesia católica es un organismo jurídico, universal, calificado como sociedad jurídica perfecta, la cual, tiene derecho a un sitio de igualdad con respecto a las otras entidades internacionales que son sui iuris, es decir que poseen una competencia plenaria".

"Si bien esta sociedad está integrada por hombres, exactamente como lo está la sociedad civil, sin embargo ella es sobrenatural y espiritual, a causa del fin por el que ha sido fundada y de los medios por los que aspira a alcanzar ese fin. Por lo tanto, se distingue y se diferencia de la sociedad civil y, lo que es de gran importancia, es una sociedad perfecta en su naturaleza, y en su título, puesto que posee en sí misma y por sí misma, por la amorosa bondad de su fundador, todas las condiciones requeridas para su bienestar y su recto funcionamiento. Y precisamente, porque el fin al que la iglesia aspira, es con mucho el más noble de los fines, así su autoridad es la más elevada de toda autoridad, ni puede ser considerada como inferior al poder civil o de cualquier modo dependiendo de él".

Cabe aclarar con Don Antonio Molina Meliá, que la iglesia católica que es "Una", actúa a través de diversas organizaciones:

- 1.- La Santa sede como Órgano Supremo.
- 2.- Los Órganos Intermedios, Conferencias episcopales, arquidiócesis, diócesis, parroquias.

Por ello, es laudable que el legislador mexicano se percate que existe esa realidad que es la iglesia.

Pero, ¿Qué decir del condicionamiento al reconocimiento de la personalidad de

la iglesia, consistente en un registro constitutivo?

Es evidente que en la iglesia existe una asociación de seres humanos que persiguen un fin lícito y por ello debe ser reconocida por el Estado, teniendo dicho reconocimiento un valor certificativo, pero no constitutivo. Porque en último término, si el legislador sigue la tesis de Francesco Ferrara, que exige un reconocimiento constitutivo para la existencia de la persona moral, cabe preguntar ¿Y quién otorga al Estado el reconocimiento constitutivo para su existencia?

¿Podríamos a caso decirle a un ser humano, que para nosotros no existe sino hasta que nos demuestre su acta de nacimiento?

Por ello, Villoro concluye: "La persona colectiva existe, aunque sea desconocida por los demás hombres y por el derecho, pero es evidente que debe ser conocida por los demás miembros que la forman".

El legislador mexicano, más consistente con una sólida posición jurídica, en el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, reconoce personalidad jurídica a las empresas mercantiles, aunque no estén inscritas en el registro correspondiente. Y no puede ser de otra forma, porque en el artículo 25 del Código Civil establece: "Son personas morales: VI.- Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan..... cualquier fin lícito", pero hace una extraña salvedad: "Siempre que no fueren desconocidas por la Ley". Y nadie podrá negar que asociarse para tributar culto al Ser Supremo es un fin lícito.

En cambio, en un trato discriminatorio y humillante, parodiando a Descartes, el legislador mexicano pretende hacer decir a la Iglesia:

"Me registro, luego existo".

A ésto replica el Jurista:

"Porque existo, me registro".

Como se ve, no se trata de un juego de palabras, sino de un problema óptico, en que esta de por medio el ser o no ser, toda vez que la nada no es susceptible de registro y no es admisible que el legislador con un "Fiat", cree "exnihilo" a la iglesia.

La lógica nos enseña "prius est esse, quam taliter esse" (primero es ser y luego obrar).

Por ello debemos hacer una distinción entre las iglesias existentes:

"Iglesias registradas" por una parte; y por la otra, "Iglesias no registradas". Pero ambas existen, independientemente de un registro certificativo y no constitutivo de su existencia.

"Aún antes de ser reconocido un Estado (y la iglesia como persona moral), tiene el derecho de defender su integridad e independencia, de tomar medidas para salvaguardar su existencia y su prosperidad, y por consiguiente de organizarse en el modo que considere mejor, de hacer leyes en su propio interés, de organizar sus servicios y de definir la jurisdicción de sus tribunales".

El texto constitucional mexicano apela a la historia para fundamentar la regulación del reconocimiento condicionado al registro constitutivo. Pero la historia, *Lux veritatis, magistra vitae* (en frase de Cicerón), nos enseña que ha quedado superada la etapa del Cesaropapismo, así como la época de la Hierocracia. El episodio de Canosa quedó atrás en la nebulosa de la historia y no debemos temer que se repita.

Es evidente que los conceptos jurídicos expresados son válidos para todas las iglesias.

Por ello, podemos concluir con Don Miguel López. "Por su naturaleza la iglesia y el Estado son dos realidades diferentes, en razón de lo cual se debe afirmar una separación y una independencia entre las dos; pero por razón de la construcción del hombre, las dos deben unirse en un principio de cooperación mutua, cumpliendo de esa manera en la historia con los objetivos de su propia misión".